

son empleados, se alzan dichos extrañamientos, y se remitirán por conducto de la Administración principal de correos de Morelia, á la general del ramo, testimonios del auto de sobreseimiento y del presente, para los efectos á que pudiere haber lugar. Igualmente, por cuanto al C. Juez de Distrito de Morelia ha obrado en esta averiguación con negligencia, omitiendo actuaciones importantes que hoy ya no se pueden cubrir y con muy poco detenimiento en las que practicó dejando de hacer á los testigos algunas preguntas necesarias, se le encarga sea más diligente en el desempeño de sus deberes judiciales."

El Fiscal, considerando que el fallo de vista ha causado ejecutoria y el sobreseimiento procede de derecho; que del estudio de las actuaciones no resultó mérito para sospechar que efectivamente haya delito en la abertura de la carta que motivó la formación de ellos; que esa misma sentencia del Tribunal de Circuito está muy bien meditada aun en la parte incidental de las faltas que advierte; que ellas no importan respecto del Juez de Distrito la gravedad del juicio sobre responsabilidad, el suscrito concluye pidiendo á esa Sala, se sirva dar por revisado este proceso, confirmando la sentencia del Tribunal de Circuito de Querétaro, en su parte secundaria relativa á los empleados á quienes la misma sentencia se refiere.

México, Febrero 6 de 1874.—*Altamirano.*

#### *Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 13 de 1874.—CÓMO pide el Sr. Fiscal.—*José M. Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Febrero 24 de 1874.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Gregorio Patiño, contra la providencia que en 31 de Octubre del año pasado dictó el Ayuntamiento de Morelia, para que destruyera el borde que habia construido en la ribera occidental del rio-grande de esta Ciudad, y para que enterara una multa de doce pesos en la Tesorería Municipal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En 5 del corriente se presentó ante este Juzgado el C. Gregorio Patiño, manifestando: que siendo propietario de los terrenos de los Ejidos, conforme á los linderos señalados por el Ayuntamiento de esta Ciudad en la escritura de 30 de Julio de 1856 otorgada á D. Justo Carrion, quien hizo igual traspaso de algunos ranchos al actual poseedor, y habiendo á su vez comprado el del Mezquite, perteneciente á los mismos Ejidos, según el certificado que adjunta del escribano público C. Francisco Cano, y cuyo rancho se limita hoy hácia el Oriente por el cauce del rio de esta Ciudad, existiendo en la ribera occidental un borde antiguo que impide el derrame de la agua sobre los terrenos de su propiedad, cree violadas en su persona las garantías constitucionales de que hablan los artículos 4º, 16 y 27 de la Carta fundamental, supuesta la Orden del Ayuntamiento, en virtud de la cual se le previene la destruccion del borde, y se le impone una multa de doce pesos. Entregada esta en la Tesorería municipal con calidad de depósito, no ha juzgado fundada la Orden del Ayuntamiento para proceder á la destruccion de que habla, y siendo apremiante el caso, ocurre á la justicia federal para que se le ampare y proteja contra la Orden del

Ayuntamiento de esta Ciudad, en las garantías que deja consignadas.

Pedido á á la Corporacion municipal el informe justificado á que se refiere el artículo 99 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, aparece confirmada en todas sus partes la Orden de que antes se ha hablado, y que se registra á la foja 1ª de los autos, aunque para fundarla se sostiene como puntos capitales, que el Sr. Patiño ha construido una obra nueva en una parte del cauce del rio, estrechando por lo mismo su corriente y dando lugar á inundaciones perjudiciales á las fincas circunvecinas y á la salubridad de esta poblacion. Que siendo entre otras la conservacion de esto, una obligacion para el Ayuntamiento, y con vista de los artículos 1071, 1079 y 803 del Código civil, y artículo 154 de la ley de 24 de Diciembre de 1862, habia decretado la Orden de que se trata y que motivaba el presente juicio. La informacion de treinta testigos que se acompaña al escrito, está uniforme respecto de los hechos que como capitales consigna el Ayuntamiento, y se asegura ademas, que el borde no es construcción antigua, sino hecha por el Sr. Patiño y en terrenos de propiedad pública.

Especificados de esta manera los hechos segun aparece de las constancias de los autos, hay que examinar, primero: cual es el valor legal que tengan unos y otros; segundo: si el Ayuntamiento de esta Ciudad al expedir su Orden, obró dentro de la órbita de sus facultades ó hizo jurídica aplicacion de las leyes citadas; y tercero: si la repetida Orden ataca ó no las garantías constitucionales, que cita la parte quejosa.

Esta acompaña á su escrito las escrituras en virtud de las cuales se titula dueño de los ranchos conocidos por de los Ejidos, habiendo hecho la adquisicion de algunos de ellos directamente de la persona á quien los adjudicó el Ayuntamiento, y de otros, en virtud de contratos celebrados con particulares. Entre estos se encuentra el del Mezquite que está limitado hácia el Oriente con

el rio grande, y en cuya ribera occidental se encuentra el borde cuya destruccion ha dado lugar al presente juicio. Verdad es que en la escritura de 22 de Junio de 1860, y en el certificado del asenbano Francisco Cano, relativo á la escritura de 21 de Abril de 1862, no se hace mérito de la existencia del borde; pero si se consigna la obligacion por parte de Patiño para hacer por su cuenta algunas obras de limpia de la sanja vieja que conduce la agua por la onlla del rancho del Mezquite, de manera que es de creerse con fundada razon, que Patiño ha estado en su derecho al procurar la conservacion del borde de que se trata.

Este punto quedará perfectamente esclarecido con la vista de ojos que se hace necesario practicar, sin que por esto las escrituras de que se ha hecho mérito induzcan á creer que son ciertos los derechos del propietario, (leyes 1ª y 114 título 18 partida 3ª). Si pues los hechos consignados por la parte quejosa cuentan á su favor con la fuerza de los documentos públicos citados, es claro que su legalidad se halla perfectamente reconocida por las leyes 1ª, 2ª y 3ª, título 14 partida 3ª.

No es por demas advertir que la presente cuestion en el punto que viene examinándose, por haberse presentado así por la parte quejosa y por la autoridad infamante, debe verse tan solo bajo la aplicacion de las leyes antiguas, supuesto que para pedirse el amparo de garantías se han promovido cuestiones sobre derechos adquiridos antes de la promulgacion del Código civil. Por otra parte, no hay que considerar aquí los otros medios que reconoce la legislacion para adquirir la propiedad, porque los títulos sobre venta aparecen hasta ahora favoreciendo los derechos del comprador, sirviendo por lo mismo ellas, así como las diligencias del informe, para que se cumpla con la 2ª parte del artículo 99 de la ley citada de 20 de Enero de 1869.

Pasando ya á considerar el valor legal que tengan los hechos consignados por el

Ayuntamiento de esta Capital, se nota desde luego que todos los testigos son dependientes de los propietarios circunvecinos que se dicen perjudicados por Patiño, y carecen por lo mismo de la imparcialidad que es de todo punto indispensable para que merezca fé su dicho, (ley 18, título 16 partida 3ª.) Es de notarse que algunos de ellos aparecen firmando como reclamantes en el escrito presentado al Ayuntamiento con fecha 22 de Octubre de este año. Se nota además en dicha informacion, que su objeto lejos de encaminarse á procurar de algun modo la justificacion de la Orden expedida contra el quejoso, tiene mas bien por mira la defensa de derechos particulares, que son materia de otras cuestiones que deben ventilarse bajo otra forma ante los Tribunales comunes. Si los hacendados colindantes con las propiedades de Patiño sufren ó no algunos perjuicios, tienen su accion expedita para hacerla valer legalmente por sí ó por persona legítimamente acreditada.

Dejan pues á un lado toda esta parte de la informacion del Ayuntamiento y contrayéndose á la que afecta directamente la naturaleza de su propia institucion, es de advertir que la creacion de los pantanos inmediatos á la Ciudad con motivo de la obra hecha por Patiño, no se halla acreditada competentemente, ni mucho menos aparece el juicio pericial sobre la insalubridad para la poblacion, como una consecuencia forzosa de aquella obra. Es indisputable que para esta calificacion se necesitan conocimientos facultativos, y que existe aquí mismo una junta de salubridad, que es la legítima consultora en casos como el presente.

En punto á juicio pericial puede verse la ley 26 título 6º, partida 5ª y la doctrina de Escrib. en su Diccionario de Legislacion. Resulta pues de este exámen, que los hechos de que se trata en el escrito del C. Procurador y que han motivado la informacion que acaba de verse, no tiene valor alguno legal en el sentido de este juicio, quedando por lo tanto injustificado el informe.

Pasando al segundo punto que debe tratarse, hay que tener presente que el artículo 68 de la Constitucion del Estado de 19 de Febrero de 1858, demarca en cada una de sus fracciones cuales son las facultades y deberes de los ayuntamientos, consignando en el 69, que una ley determinará la estension y límites de sus facultades. Conforme á la fraccion 1ª, no tiene duda que le corresponde á la policia interior de los municipios en todos sus ramos.

Viniendo ya á la ley orgánica de 10 de Abril de 1868, se encuentra de una manera mas expresa la obligacion que tienen los ayuntamientos de cuidar de la desecacion de los pantanos y dar corriente á las aguas estancadas ó insalubres; pero no se halla en ella consignada facultad expresa para que por sí y ante sí se dicte una providencia que afecte las garantías individuales. Tan se comprendió así por la parte informante, que tuvo que ocurrir al artículo 154 de la ley de 24 de Diciembre de 1824, para fundar la determinacion del Ayuntamiento.

Mas este artículo previene, *que el Ayuntamiento haga que los propietarios de tierras que toquen en su curso los rios, hagan la limpia de ellos en la parte que les corresponda, y que se fortifiquen sus bordes: que haga tambien que no se extravíe el curso de las aguas por obras particulares, y en caso de abuso, lo ponga en conocimiento del Gobierno para que se tomen las providencias convenientes, sin perjuicio de aplicar las multas á que hubiere lugar.* Como se vé, esta cita legal es contraproducente, por que aún en el caso de abuso por parte de Patiño, debió el Ayuntamiento haberlo avisado al Gobierno para que tomara las providencias de que habla el artículo; pero en manera alguna decretarias por sí.

Es pues un hecho perfectamente esclarecido con la luz de la ley, que la Orden citada por lo que mira á la destruccion del borde, carece de fundamento legal. Igual proposicion debe asentarse respecto de su segunda parte que comprende la multa, pues-

to que el artículo 161 de la ley citada, exige la previa averiguación sumaria del hecho, y bien sabido es como debe practicarse esta en derecho para que surta efectos. Es por esto, que no encontrándose arreglada la que formó el Ayuntamiento, no puede servirle de base para la determinación dicha.

Como conclusión de este segundo punto que se examina, debe asentarse que el Ayuntamiento no obró dentro de la órbita de sus facultades, ni es exacta la aplicación que se hace de las leyes en su informe. Respecto de las citas del Código civil, son aplicables las mismas observaciones que se dejan expuestas al tratarse de la exposición del quejoso.

Es llegada la vez de entrar á la tercera parte sobre violación de garantías constitucionales, para lo cual debe tenerse presente, que la propiedad del Sr. Patiño se encuentra hasta hoy asegurada con los títulos traslativos de dominio, y que su industria ó trabajo en ella, es una de las garantías que en su libre ejercicio consigna el artículo 49 de la Constitución federal. Esta garantía, si bien cuenta con toda la protección de la ley, también es cierto que tiene su limitación siempre que ataque los derechos de tercero ó ofenda los de la sociedad. Para lo primero se necesita la sentencia judicial, lo cual supone un juicio en toda forma; y para lo segundo la resolución gubernativa que implica así mismo la necesidad del conocimiento del hecho. Ahora bien, en el caso que se examina, no aparecen satisfechas estas condiciones, y por lo mismo la disposición del Ayuntamiento conculca en la persona del quejoso, las garantías individuales del artículo 49 constitucional.

Por lo que mira á las del 16, es también incontestable que se encuentran en el mismo caso, porque para que se cause en la posesión que tiene el quejoso la molestia que envuelve la orden, era preciso que esta no solo se hubiera motivado, sino que se fundara la causa legal del procedimiento. Debe notarse que conforme á la letra y espíritu

del artículo, uno es el motivo y otro el fundamento. Este envuelve la comprobación de los hechos, y aquel la razón legal de la determinación nacida de aquel conocimiento. Como se ha visto ya, no aparece de lo examinado la existencia de las condiciones de este artículo, y por lo mismo deben considerarse atacadas, por la orden dicha, las garantías de que habla.

Finalmente, la determinada en el artículo 27, que se halla perfectamente ligada con las anteriores, se entiende así mismo conculcada por una consecuencia precisa, nacida de la intimidad de sus relaciones.

En virtud de todo lo expuesto, y considerando el presente caso comprendido en la fracción 1ª del artículo 19 de la ley orgánica citada, el Promotor pide con fundamento del artículo 29 de la misma, se sirva V. resolver; primero: que la orden del Ayuntamiento de 31 de Octubre próximo pasado, viola en la persona del C. Gregorio Patiño las garantías individuales de que hablan los artículos 49, 16 y 27 de la Constitución federal; y segundo: que la Justicia de la Unión lo ampara y protege contra esta violación.

Morelia, 19 de Diciembre de 1873.—*N. Caballero*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, 2 de Febrero de 1874.—*Isidro Aleman*.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Morelia, Enero 27 de 1874.—Visto este juicio de amparo intentado por el C. Gregorio Patiño contra el Ayuntamiento de esta Ciudad, por creer violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 49, 16 y 27 del Código fundamental de la República, con la orden dictada por aquella Corporación en 31 de Octubre del año próximo pasado, mandándole destruir el borde levantado en la rivera occidental del Río grande que atraviesa los terrenos del rancho llamado los Ejidos, de la propiedad del

citado C. Patiño é imponiéndole al mismo tiempo una multa de doce pesos: y

Considerando primero: que la citada orden que se registra á la 1ª foja de estos autos, no ha sido expedida con los requisitos prevenidos en el artículo 16 constitucional citado, puesto que no motiva ni funda el procedimiento del Cuerpo municipal, como es fácil de convencerse á su simple lectura; puesto que no se expone en ella ni el motivo que impelió al Cuerpo municipal á dictarla, ni se citan en las dos proposiciones que contiene, los fundamentos legales en que se haya apoyado la misma Corporación para expedirla, cuya omisión envuelve por sí sola una infracción del artículo citado y una violación palpable de la garantía que encierra.

Segundo: que sin entrar en el examen y apreciación de los puntos sobre extensión de la propiedad predial del C. Patiño, sus límites, ubicación y demás que han promovido durante la tramitación de este juicio, tanto el Ayuntamiento en su informe justificado como la parte quejosa en sus alegatos y pruebas rendidas al efecto; así como las cuestiones relativas á si el bordo levantado en la rivera occidental del río por el C. Patiño, es ó no perjudicial tanto á los propietarios de los terrenos colindantes, como á la salubridad de la población, por no ser el objeto de la presente controversia, ni conducir á la solución de la cuestión sometida á la decisión de la justicia federal, que debe limitarse y recaer sobre si ha habido ó no violación de garantías en el acto reclamado.

Tercero: que al quejoso ha fundado la acción deducida en este juicio; en que la providencia acordada por el Ayuntamiento le impide, en primer lugar, aprovecharse de uso del terreno de su propiedad, que inundarían las aguas del río si se llevara á efecto aquella providencia: en que, en segundo lugar, al ordenársele la destrucción de dicho bordo se hace sin motivar ni fundar debidamente, como ya se dijo, la destrucción del bordo y la imposición de la multa; y en ter-

TOMO V.—PARTE II.

cero, que se le ataca el derecho de propiedad que cree haber usado legalmente al levantar el repetido bordo para disecar el terreno que queda al lado occidental de él.

Cuarto: que el Cuerpo municipal al evacuar el informe justificado que se le pidió, intentó demostrar por medio de la información de veinte testigos, que el C. Patiño al levantar dicho bordo, lo había hecho no en la rivera del río, sino en su alveo, desviando así la corriente de sus aguas y obligándola en esta parte á seguir, no su curso ordinario, sino el que solo tiene en la estación de secas.

Quinto: que el C. Patiño para fundar los motivos de su queja, aduce el derecho de propiedad que alega sobre el terreno que sirve de margen al río en la parte en que está levantado el bordo, objeto de la presente cuestión; y que para probar este derecho adujo, primero, los títulos de dominio que se registran en autos desde las fojas 2 hasta la 20 inclusive, que son escrituras de adjudicación y compra de todos los terrenos que forman hoy el rancho conocido con el nombre de "Los Egidos;" y segundo, la información de testigos presentados en el término de prueba, visible en autos desde la foja 72 hasta la 87, por medio de repreguntas que pidió se hicieran á las mismas personas que el Ayuntamiento hizo declarar como testigos.

Sesto: que entrando ya al examen de estas diversas justificaciones resulta, en primer lugar, probada la propiedad del C. Patiño al terreno que forma la margen occidental del río sobre que está levantado el bordo; segundo, que este no había sido dentro del lecho ó cauce del mismo río, sino en la rivera de él, de que indudablemente puede servirse el dueño del terreno, según es de verse en las doctrinas del Diccionario de Legislación de Escribano, en las voces "Rivera y Río;" y con fundamento de las leyes 3ª, 6ª y 8ª título 28 partida 3ª, cuyas disposiciones están igualmente contenidas en los artículos 798 y 802 del Código civil vigente; y tercero, el derecho que asiste al mismo C. Patiño para aprovecharse de las tierras que

el río deja secas al retirarse sus aguas, según el precepto de las mismas disposiciones y del artículo 893 del Código citado. Estos hechos no solo han sido probados por el C. Patiño, sino confesados por el mismo Ayuntamiento, tanto en su propia orden como en el informe justificado, pues en uno y en otro se previene á Patiño *destruya el borde que ha levantado en el margen occidental del río grande de esta Ciudad.*

Sétimo: que la prueba testimonial rendida por el mismo C. Patiño y que se registra de las fojas 72 en adelante, demuestra de una manera plena, que el borde en cuestión está levantado sobre la ribera occidental del río, marcada por la hilera de árboles grandes, viejos y nuevos que señalan la dirección de esta margen, como lo han declarado veinte de los testigos al contestar á la 4ª, 7ª y 9ª pregunta; siendo de notarse que los veinte testigos que deponen sobre este punto, con escepcion de los CC. A. Mota y Arias, son de la hacienda de la Huerta y del rancho de Sindurio, de cuyos propietarios son ó dependientes ó arrendatarios, y por lo mismo interesados en la cuestión, según lo ha declarado en su informe el mismo Ayuntamiento. Este punto relativo al curso del río y la margen sobre que está levantado el borde, fué rectificado en todas sus partes, por el reconocimiento practicado por este Juzgado el doce del corriente y cuya diligencia es un medio de prueba reconocido por el artículo 594 del Código de procedimientos.

Octavo: que de las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, resulta justificado con toda evidencia; primero: que de llevarse á efecto la orden del Ayuntamiento de 31 de Octubre del año pasado se privaría á D. Gregorio Patiño del derecho que tiene de aprovecharse de los productos del trabajo que ha impendido en levantar el borde, lo que no se le puede impedir sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolución gubernativa dictada en términos le-

gales, cuando ofenda los de la sociedad; segundo: que la repetida providencia, que indudablemente molesta al citado Patiño, ha sido dictada sin motivar y fundar su expedición; tercero: que la misma providencia envuelve una ocupación de la propiedad particular, sin consentimiento de su dueño, ni estar justificada la pública utilidad y sin la previa indemnización, requisitos todos sin los cuales dicha ocupación es un atentado prohibido por la ley.

Por todo lo expuesto y con fundamento del artículo 101 de la Constitución general y de la ley de 20 de Enero de 1869, como pide el C. Promotor fiscal, se declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. Gregorio Patiño contra la providencia que en 31 de Octubre del año pasado le intimó el Ayuntamiento de esta Ciudad, para que destruya el borde de la ribera occidental del río grande que atraviesa parte de los terrenos de aquel, y para que situara una multa de doce pesos en la Tesorería, de esto.

Hágase saber este fallo, publíquese y remítanse las copias de estilo y las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Definitivamente juzgando lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan Doy fé.—*Gabino Ortiz* Una rúbrica. Ante mí.—*Isidro Aleman*. Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 2 de 1874.—*Isidro Aleman*.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 13 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Gregorio Patiño, contra la providencia dictada por el Ayuntamiento de Morelia, ordenándole destruir el borde que había levantado sobre la margen occidental del río grande de esa Ciudad, en la parte que atraviesa los terrenos del rancho llamado "Los Egi-



dos" de su propiedad, imponiéndole además una multa de doce pesos, cuya providencia viola en concepto del quejoso, las garantías que consignan los artículos 4, 16 y 27 de la Constitución federal; y Considerando: que por las pruebas rendidas en este juicio, aparece que no es claro y expedito el derecho conque el Ayuntamiento haya ordenado la destrucción del borde, pues es enteramente dudoso que haya sido construido sobre el cauce del río, como sostiene esa autoridad, y no como afirma Patiño sobre la ribera y en terrenos de su propiedad; que en consecuencia, siendo el punto litigioso, el Ayuntamiento de Morelia no puede sin obtener antes una resolución judicial favorable á los intereses que representa, llevar adelante la referida orden sin infringir los artículos 16 y 27 de la Constitución federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 27 de Enero del presente año, que declara: que la justicia de la Unión ampara y protege á D. Gregorio Patiño, contra la providencia que en 31 de Octubre del año pasado, dictó el Ayuntamiento de Morelia para que destruyera el borde que había construido en la rivera occidental del río grande de esta Ciudad, y para que enterara una multa de doce pesos en la Tesorería Municipal.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 19 de Mayo de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

## COMPETENCIA

*Suscitada entre el Juez de Distrito de Morelos y el 2º del mismo fuero de México, para no conocer de la causa iniciada contra el C. Lic. D. Mariano Villanueva, por fraude á la Hacienda pública.*

*Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.*

El Fiscal dice: que se ha suscitado una competencia entre el C. Juez de Distrito de Morelos y el 2º del mismo fuero de México, para no conocer de la causa iniciada contra el Lic. D. Mariano Villanueva, por fraude á la Hacienda pública. Esa causa se formó de la manera siguiente:

En el mes de Junio de 1871, el Supremo Gobierno decretó en su totalidad la reclamación de nueve mil seiscientos noventa y tres pesos sesenta y dos centavos que el C. Lic. Villanueva hacía á la Hacienda pública, en compensación de una casa situada en el paraje conocido hoy por Riviera de San Cosme, en esta Capital, y cuya casa fué derribada en los años de 1862 á 1863, por las fuerzas republicanas, para defensa de México.

El Gobierno sin embargo, desechó esa demanda, por no haberse justificado dentro del término legal el crédito expresado de nueve mil y pico de pesos; pero dispuso que el negocio se ventilara ante los tribunales, por resultar del expediente que con motivo de aquella reclamación se había formado, algunos datos que revelaban, que por parte del Lic. Villanueva se había intentado un fraude, procurándose hacer subir inconsideradamente el valor de la finca destruida, ha-